

EN TORNO A LA TRANSICIÓN SOVIÉTICO-RUSA

JESÚS DE ANDRÉS*

Cuando a finales de los ochenta se hundieron los sistemas comunistas del Este de Europa las ciencias sociales llevaban algunos años dedicando buena parte de su literatura al análisis de los distintos procesos de transición política que habían tenido lugar en la Europa del Sur y Latinoamérica. Tal era la importancia de estos estudios que llegaron incluso a constituirse como una rama desgajada de la Ciencia Política, ayudando a su desarrollo, sin duda, el elevado número de países que emprendieron procesos de cambio. La coyuntura histórica y, por supuesto, el éxito inicial de la mayoría de los casos alentó el optimismo histórico que establecía para todas las transiciones un idéntico destino: la democracia. El inesperado proceso de transformaciones económicas y políticas abierto en los países de la Europa del Este y en la antigua Unión Soviética, además de poner de manifiesto, una vez más, la precariedad predictiva de las Ciencias Sociales, también contribuyó de forma decisiva a reforzar el optimismo sobre los resultados. Parecía ser suficiente emprender los cambios para tener asegurado un final feliz. Argumentos para la identificación con lo ocurrido años antes en Portugal, España, Grecia o la mayor parte de América Latina no faltaban, especialmente porque los obstáculos con que se suele topar la construcción de sistemas democráticos vienen a ser los mismos. Sin embargo tampoco faltaron dificultades para incluir a todos en un mismo grupo, con un destino final idéntico e inexorable. Suponer que el inicio de los cambios equivalía a colocarse en una vía única, con una sola dirección, sin desvíos y que por su propia inercia cada uno de los países llegaría a la estación democrática no podía argumentarse sino partiendo de la ingenuidad más absoluta. Máxime cuando en buena parte de los casos primó la oposición y el enfrentamiento con los detentadores del poder más que la construcción de nuevos sistemas democráticos o la puesta en práctica de reformas políticas y económicas a todas luces necesarias.

De entre los países que todavía no han llegado a la meta, bien porque nunca la buscaron, bien por abandono, destaca, sin ser el único, el caso ruso. Cualquiera de las repúblicas que conformaron la Unión Soviética, exceptuando, con numerosos reparos, a las Bálticas, puede encajar en la misma categoría de transiciones hacia la no democracia. La incertidumbre sobre la forma definitiva que asumirán estos países ha afectado a sus órdenes económico, político y territorial; la indefinición con respecto a lo pretendido aqueja a la mayoría de sus gobernantes; los enfrentamientos entre todos y cada uno de los actores políticos a la hora de plantear posibles soluciones caracterizan, por último, el juego político, determinando las visiones contrapuestas existentes sobre la política a seguir. Esa poción mágica que han utilizado algunos especialistas en

* Profesor de Ciencia Política. UNED

transiciones a la democracia llamada consenso tiene difícil cabida en un sistema tan complejo como el ruso: la ausencia de consolidación de los propios Estados y las enfrentadas y erráticas soluciones propuestas para la solución de la crisis emborronan notablemente el futuro. Mal se puede consolidar la democracia cuando no se ha llegado a ella y mal se puede transitar hacia la misma cuando no se ha consolidado el mapa resultante de la desaparición de la URSS.

El actual sistema político ruso, aunque resultante de la Constitución de diciembre de 1993, ha sido fruto de la propia evolución del proceso de cambio comenzado hace más de tres lustros. Parece fuera de toda duda que el camino de transformaciones emprendido por la Unión Soviética no tenía un objetivo democratizador, como tampoco está claro que fuera occidentalizante. La intención de aquellos que impulsaron las primeras reformas estaba lejos de pretender conformar un sistema político equiparable a los de Occidente, tan sólo seguían la máxima que utilizara Lampedusa para otro caso y momento: "si queremos que todo siga igual, es necesario que todo cambie". Ante la falta de resultados patentes en las transiciones en curso, que como hemos señalado demostraban no seguir una línea predeterminada, algunos autores se plantearon, ya a finales de los años ochenta, diferenciar entre procesos de *liberalización* y de *democratización*. Otros, dando un paso más allá, observaron que las transiciones desde regímenes autocráticos o autoritarios podían llevar a resultados diferentes a la democracia que se encontrasen, en realidad, en posiciones intermedias: regímenes híbridos que calificaron como *dictablandas* y *democraduras*. Si intentamos aplicar algunas de estas categorías a la transición soviético-rusa podremos concluir que en el período de *perestroika* hubo un proceso de liberalización del sistema y que en la fase inicial de la transición específicamente rusa no hubo voluntad alguna de transitar a la democracia. Este último período se ha caracterizado por el incumplimiento de las normas jurídicas existentes previamente, por la inexistencia de unas reglas de juego provisionales que facilitarían un proceso de transición sereno y, lamentablemente, por la imposición del modelo definitivo.

Las tensiones existentes en las elites, entre las distintas tendencias ideológicas, corrientes del aparato del Estado y grupos de poder, se *solucionaron*, después de llegar a un grado máximo de tirantez, mediante la imposición y a través de mecanismos a todas luces ilegales, y en ocasiones violentos, de apropiación del Estado y sus instituciones. De esta manera, el proceso de transformaciones políticas pivotó sobre los golpes de Estado de agosto de 1991 y septiembre de 1993. Estos dos momentos afectaron principalmente a la velocidad y dirección del cambio, acelerando el ritmo de las reformas y determinando, no siempre en la dirección apuntada, su orientación: paradójicamente el golpe involucionista de 1991 facilitó la apertura política; de igual forma, el golpe de 1993, pretendidamente democrático en sus intenciones, ha dificultado e impedido hasta el momento cualquier posibilidad de consolidación democrática. Por tanto, si hubiera que poner nombre al sistema resultante de la transición soviético-rusa deberíamos utilizar bien conceptos híbridos entre la democracia y distintas formas de dictadura (*dictablanda*, *democracia delegada*...) bien categorías procedentes directamente de la clasificación de formas de gobierno autoritarias (*bonapartismo*, *caudillismo*...), términos que definen, en cualquier caso, una misma realidad de déficit democrático. Si preferimos abandonar las

clasificaciones académicas para utilizar un lenguaje más descriptivo los calificativos, lógicamente, incrementarán su dureza cuanto más cercanos estén a la realidad.

Más allá de la herencia del comunismo soviético, de las aficiones éticas del Presidente Yeltsin o del carácter continuista de Putin, presentadas a menudo como explicación a la caótica situación en que está sumergida la Federación Rusa, es necesario rechazar simplificaciones para analizar en qué forma se ha producido la implantación del capitalismo en Rusia tras la disolución de la URSS, quién la ha llevado a cabo y qué consecuencias ha tenido. Tras la desaparición de la URSS en 1991, la nueva Rusia tuvo que hacer frente a una triple transición que abarcaba no sólo lo político y lo económico sino que también incluía lo territorial y, como consecuencia de todo ello, afectaba a la propia esfera internacional. El fracaso en estos tres frentes, político, económico y territorial, se ha venido manifestando en sus respectivas crisis.

La principal observación que debe realizarse sobre el actual sistema político ruso, formalmente democrático pero profundamente autoritario, nos remonta a su viciado origen ya que fue el resultado de la Constitución de 1993, aprobada tras el autogolpe de Yeltsin, el asalto a cañonazos del Parlamento y la exclusión de buena parte del arco político. Al margen del rechazo que pueda generar y de su déficit de legitimidad, la Constitución ha favorecido la configuración de un régimen personalista que concentra todo el poder en las manos del Presidente y que, como tal, ha pasado a manos de Putin, nuevo inquilino del Kremlin. Este sistema, el más eficaz para los intereses que pretendía defender, funcionó bien mientras su titular, Borís Yeltsin, gozó de buena salud, pero comenzó a entrar en crisis en el momento en que el Presidente enfermó y comenzó a aparecer y desaparecer del escenario político. El nombramiento y posterior elección de Putin, cuya salud física es indudablemente mejor que la de su predecesor, garantiza de nuevo su idoneidad. En un país en el que no existe una sociedad civil articulada, en el que el grado de anomia social alcanza una cota alarmante y donde los partidos políticos en la mayoría de los casos no son más que aparatos al servicio de sus líderes es poco probable el funcionamiento democrático de las estructuras políticas. Desde 1993 se ha venido conformando lo que se ha denominado como "el partido del poder", todo un entramado económico y político que funciona a través de fortísimos lazos clientelistas. En los procesos electorales parlamentarios de 1993, 1995 y 1999 distintos partidos han ocupado el papel de representante del mismo (*Opción de Rusia, Nuestra Casa es Rusia y Unidad*, respectivamente). La falta de definición del principal partido de la oposición, el comunista, que unas veces aparece como radical partido antisistema y otras como un elemento más del entramado político financiero, contribuye a la ausencia de un proyecto político alternativo viable que no pase por mayores dosis de autoritarismo.

En cuanto al sistema económico no hay duda alguna sobre el hecho de que la estrategia asumida por los dirigentes rusos y auspiciada por los organismos internacionales es la implantación definitiva de un sistema de economía capitalista inscrito en el marco internacional. En este sentido, la ausencia de un proyecto mínimamente planificado, en el buen sentido de la palabra, y las enormes carencias del sistema legal ruso han favorecido una acumulación de capital descontrolada y ajena al control estatal, un proceso de privatización con idénticas características y un funcionamiento atípico del sistema financiero, lo

cual ha favorecido el surgimiento de una economía criminalizada de corte mafioso. El atraso tecnológico del país se hizo evidente en el momento en que los mercados rusos, capaces únicamente de exportar materias primas, se abrieron a la competencia internacional. Si a este cuadro le añadimos la crisis financiera del Estado, con frecuentes impagos de sueldos, imposibilitado para subvencionar ningún tipo de actividad e incapaz de articular un sistema impositivo distribuidor de la riqueza o de mantener el cambio del rublo, el panorama no puede ser más desolador. La única esperanza de solución ha venido del lado de la inversión extranjera y de los diferentes créditos facilitados por las organizaciones internacionales, con el Fondo Monetario Internacional a la cabeza. En este sentido se ha recurrido numerosas veces a la utilización de mecanismos de presión para conseguir la ayuda financiera occidental. Por un lado se permite y alienta la involución nacionalista y por otro se utiliza ésta como amenaza ante los grandes organismos económicos internacionales.

Pese a los últimos cambios siguen abiertas las distintas crisis por las que atraviesa el país. Continúa sangrando la herida del Cáucaso cuyo problema requiere una solución más allá de la inaplazable finalización del conflicto. La política continúa pese a que la elección de Putin, en marzo de 2000, ha traído consigo una aparente normalidad que aleja las disputas entre el Parlamento y el Presidente: no existe intención alguna de democratizar lo que parece haberse consolidado. Sigue presente, en fin, la económica. No han desaparecido las dificultades y los signos no indican que vayan a hacerlo en breve. El camino de incertidumbre, especialmente para el sufrido pueblo ruso, está lejos de finalizar.